



Dirección General de Igualdad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS Y PERSONAS DEPENDIENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (CENTRO DE ACOGIDA Nº 6, EMILIA PARDO BAZÁN), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

La Violencia de Género es una manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, que conculca los derechos fundamentales de las mujeres y vulnera el principio de igualdad, reconocido constitucionalmente.

La Comunidad de Madrid, desarrolla las competencias contempladas por su Estatuto de Autonomía relativas a la «promoción de la Igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural», en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, tiene por objeto prevenir y combatir la Violencia de Género en sus diferentes causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la asistencia y protección de las víctimas, con medidas de carácter integral. Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, las agresiones sexuales y abusos sexuales contra la mujer.

El Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, atribuye en su artículo 9 a la Dirección General de Igualdad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, las siguientes competencias en materia de asistencia a las víctimas, prevención y erradicación de la violencia de género:

a) La adopción de medidas dirigidas a prevenir y erradicar cualquier manifestación de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, sus hijos e hijas y otras personas dependientes de ellas, trabajando coordinadamente con todas las administraciones públicas implicadas.

c) La adopción de medidas de atención integral a través de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género y de la Red de Centros y Servicios para Mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid, con especial atención a aquéllas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito de la Comunidad de Madrid.

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de género de la Comunidad de Madrid establece una especial protección para algunos colectivos de víctimas de violencia de género que entiende como especialmente vulnerables, y menciona expresamente a las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidad.

La misma Ley, en su artículo 15, enuncia, entre otros, el principio de efectividad entre las *“Medidas de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia de género”*, de la siguiente forma: *“Se adoptarán las medidas necesarias para que tengan garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos las víctimas cuyas circunstancias personales y sociales supongan una mayor dificultad para el acceso integral a la asistencia y, en especial, las mujeres inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, y las mujeres con discapacidad.”*

La ley recoge en su artículo 16 que “la Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de mujer, dispondrá de los siguientes dispositivos para dar acogida temporal a las víctimas de Violencia de Género”. El artículo 16.1b) establece la figura de los Centros de Acogida, a los que atribuye el objeto de dispensar alojamiento seguro, así como manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo, por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de doce meses. Asimismo, señala que éstos ofrecerán a las mujeres y personas a su cargo un tratamiento integral de recuperación que favorezca, desde los ámbitos psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico, la normalización de la unidad familiar y la superación de los efectos de la violencia.

La capacidad del Centro de Acogida número 6 “Emilia Pardo Bazán”, cuya licitación se propone, se establece en un total de 16 plazas, en régimen de acogimiento residencial. De este total de plazas, 4 plazas se reservarán preferentemente a mujeres víctimas de violencia de género de 65 años o más.

Las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género pueden considerarse como un colectivo especialmente vulnerable con mayores dificultades para acceder a la asistencia integral. Según un Estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género¹, los recursos especializados están muy poco enfocados hacia las víctimas de mayor edad, y la violencia de género contra las mujeres mayores es un fenómeno menos denunciado y menos atendido por los recursos públicos.

Los recursos especializados en violencia de género, si bien tienen un carácter más coordinado e integral, adolecen de perspectiva de curso vital y no se adaptan a las características que reviste el impacto de la violencia de género en las mujeres mayores de 65 años.

En la actualidad la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid cuenta con un total de 4 Centros de Acogida que disponen de 102 plazas. Durante el año 2023 la ocupación media de estos centros fue de un 74,93 % habiéndose atendido en los mismos a 88 mujeres y 126 menores.

El tiempo de estancia de las mujeres en el recurso será el necesario para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de 12 meses, con carácter general, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 5/2005, o de 18 meses para las mujeres de 65 años o más, dada la dificultad en la consecución de objetivos de autonomía y debido a las características especiales de este colectivo.

¹ Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género.

Los servicios que se prestarán en el centro de acogida para apoyar la normalización de la vida de estas mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijos y personas dependientes, serán los siguientes:

- Alojamiento y manutención
- Provisión de artículos de menaje e higiene. Otros gastos corrientes y de primera necesidad siempre que sean justificados, así como otros gastos de material escolar, recuperación de la autoestima etc, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Análisis, planificación, ejecución y seguimiento de la intervención personalizada diseñada para cada una de las usuarias del centro, y en su caso, de sus hijos y personas dependientes.
- Apoyo para la adquisición o recuperación de habilidades sociales y personales.
- Orientación, apoyo y atención psicosocial tanto para las usuarias del recurso como para los hijos a su cargo.
- Información y acompañamiento en los procesos de inserción socio-laboral.
- Apoyo en el aprendizaje de técnicas y acciones positivas para potenciar el correcto cuidado y desarrollo de los menores, así como en la asunción de responsabilidades respecto del menor.
- Apoyo en las gestiones administrativas y de su vida diaria, y en su formación educativa y laboral.
- Apoyo, cuando proceda, en la gestión de plazas de guardería, y centros educativos, así como en el acceso a la enseñanza no reglada para sus hijos.
- Facilitar el acceso a los servicios socio-sanitarios, haciendo el acompañamiento en aquellos casos en que sea necesario para garantizar una adecuada atención a las usuarias, a sus hijos, así como a las personas dependientes. Así como, facilitar información y asistencia para la cumplimentación de los formularios de ayudas económicas previstas para las mujeres víctimas de violencia de género. En particular, las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género para favorecer su salida de centros residenciales de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

La intervención personalizada para cada una de las usuarias se prestará por un equipo multidisciplinar de profesionales. A este respecto, se sigue tratando de dotar de estabilidad a los equipos profesionales al introducir en la documentación del expediente del contrato, cláusulas sociales que van a redundar en una mayor calidad del servicio prestado.

Por lo que se refiere a la subcontratación, se admite la misma en el presente expediente, y en las prestaciones accesorias que no estén directamente relacionadas con el objeto del contrato (servicio de limpieza, elaboración de menús, mantenimiento, seguridad, vigilancia y supervisión externa del equipo profesional, en su caso) siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 216 y 217 del mismo texto legal.

En el presente contrato de servicios, se consideran tareas críticas las relacionadas directamente con la atención especializada que se proporciona a las personas usuarias del recurso.

Esta limitación se justifica en el estricto control que el adjudicatario debe ejercer sobre la atención directa desarrollada por los profesionales que deben atender este recurso, como parte esencial del servicio que se contrata, y por la especial protección de las personas usuarias del mismo, en su condición de víctimas de violencia de género.

Tal control se garantiza si la relación de la empresa contratista sobre el personal directamente adscrito a la prestación principal del contrato, es la definida en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), y los servicios prestados por las personas profesionales quedan estrictamente dentro de su ámbito de organización y dirección.

El incumplimiento de esta limitación en materia de subcontratación será causa de resolución del contrato.

En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.

En otro orden de cosas, por lo que respecta al plazo de garantía, dada la naturaleza y las características del presente contrato, cuyo objeto es la prestación de un servicio de carácter social, no procede el establecimiento de un plazo de garantía, por considerarse que antes de proceder a la recepción del contrato, se han tenido que cumplir las prescripciones técnicas del servicio, no pudiendo derivarse con posterioridad, dada la naturaleza del contrato, vicios o defectos que puedan quedar garantizados (artículo 210.3 del LCSP).

Se puede calificar este contrato como de tracto sucesivo y no de resultado, lo que unido a la naturaleza de sus prestaciones, constituye un supuesto de excepción recogida en el artículo 210.3 de la LCSP, no siendo necesario el establecimiento de un plazo de garantía.

Por las razones expuestas, se inicia el expediente para la tramitación del contrato de servicios para la gestión del Centro de Acogida número 6 "Emilia Pardo Bazán", que contará con un total de 16 plazas, en régimen de acogimiento residencial. De este total de plazas, 4 plazas se reservarán preferentemente a mujeres víctimas de violencia de género de 65 años o más.

El presente contrato se financia con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD

Firmado digitalmente por: REYES RIVERA PATRICIA-ISAURA
Fecha: 2024.04.12 12:42

Fdo.: Patricia Reyes Rivera